



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Manuel Salvador Cañas
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-010-2018-00689
TEMA	Pensión de vejez bajo el Decreto 758 del 90, aplicando SU-769 de 2014
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **334** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MANUEL SALVADOR CAÑAS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, en el proceso con radicado **05-001-31-05-010-2018-00689**.

• **PRETENSIONES:**

El demandante pretende se declare que estuvo afiliado al ISS hoy COLPENSIONES cotizando más de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, siendo acreedor del régimen de transición.

Como consecuencia, se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión de vejez desde el 16 de septiembre de 2001, junto con sus mesadas comunes y especiales, indexadas, los intereses moratorios, indexación de todas las condenas y costas procesales.

• **HECHOS:**

El demandante sustenta las anteriores pretensiones manifestando que prestó los servicios tanto en el sector privado como en el público, reuniendo un total de 569 semanas, siendo beneficiario del régimen de transición bajo el decreto 758 de 1990. Que nació el 16 de septiembre de 1941, cumpliendo los 60 años de edad antes del 31 de julio de 2010. Y que le fue negada la pensión de vejez por no cumplir con los requisitos de la ley 797 de 2003, por lo que le fue reconocida la indemnización sustitutiva, por valor de \$4'932.839.

- **CONTESTACIÓN:**

Frente a los hechos de la demanda expuso que es cierto que laboró para empresas privadas como ara el sector público. Que es cierta la fecha de nacimiento. Que es cierto que se le negó la pensión de vejez y se le reconoció la indemnización sustitutiva. Y que los demás no son hechos sino apreciaciones jurídicas de la parte actora. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones. Y planteó varias excepciones de fondo, en donde están incluidas las de prescripción y compensación indexada, entre otras.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 30 de junio de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y paga al demandante la pensión de vejez del **decreto 758 de 1990**, por ser beneficiario del régimen de transición, en cuantía mínima, y por efectos de la prescripción a partir del 5 de julio de 2015, con un retroactivo hasta el 31 de mayo de 2022, por valor de **\$76'944.549**, suma la cual se deberá indexar al momento del pago, autorizando la **compensación indexada** de lo pagado por indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de **\$4'932.839**, y autorizando los descuentos en salud.

Como argumento de su decisión, expuso que las cotizaciones al decreto 758 de 1990, no tienen que ser exclusivamente en el régimen privado, como lo ha reiterado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, como son las sentencias T-398 de 2009, SU-057 de 2018, SU-317 de 2021, SL1981 de 2020 y SL4513 de 2021.

Y **ORDENÓ** a COLPENSIONES, que a partir del 1° de junio de 2022, la mesada se seguía reconociendo en cuantía mínima sin perjuicios de los incrementos anuales de ley.

ABSOLVIÓ de los intereses moratorios.

DECLARÓ probada la excepción de compensación indexada e inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios. Y parcialmente la de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costas a COLPENSIONES.

- **APELACIÓN:**

- ✓ COLPENSIONES:

La accionada interpuso recurso de apelación indicando que, se debe revocar de manera parcial el retroactivo pensional reconocido el 5 de julio de 2015, ya que debe ser desde el 13 de septiembre de 2018, toda vez que esta es la fecha en que quedó en firme la actuación administrativa por parte de Colpensiones, cuando interpuso los recursos de ley frente al pago de la pensión de vejez. Y que debe modificarse el disfrute del retroactivo, ya que, si bien el demandante aportó cotizaciones hasta el año 2006, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de la sumatoria de tiempo público y privado, se vino a variar con la sentencia SL1947 de 2020, donde se contempla esta posibilidad, por lo que este derecho solo puede reconocerse a partir del 30 de mayo de 2022.

Así mismo, la sentencia será revisada en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** respecto a las condenas impuestas a COLPENSIONES.

- **ALEGATOS:**

- ✓ COLPENSIONES:

Presentó sus alegatos señalando que no se acreditaron los supuestos de hechos y de derecho para la declaratoria de la pensión de vejez bajo el

régimen de transición a partir del 5 de julio de 2015, toda vez que el demandante perdió el régimen de transición al no cumplir los requisitos del acto legislativo 01 de 2005, y además la sentencia SU-769 de 2014, que permitió la sumatoria de tiempos públicos y privados, se emitió cuando ya se había consolidado el derecho y se le había reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Que el actor al 31 de julio de 2010, si bien contaba con la edad requerida, no contaba con las semanas exigidas, ni las 1000 ni las 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad requerida, pues tan solo tenía reunidas 569 semanas cotizadas en cualquier tiempo, y 350,29 semanas cotizadas, exclusivamente al ISS hoy Colpensiones, en los últimos 20 años, semanas que no le permiten obtener el reconocimiento de una pensión de vejez mediante artículo 12 del Decreto 758 de 1990. Que en caso tal de que se confirme la sentencia, se debe tener en cuenta la figura de la causación y disfrute, por lo que, al no existir novedad de retiro, la pensión debe ser reconocida desde el 23 de septiembre de 2018, fecha en la cual se agotó el trámite administrativo para el reconocimiento de la prestación pensional. Que no deben proceder los intereses moratorios. Y que no se debe condenar en costas.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Formato de solicitud de prestaciones económicas, presentado el 4 de julio de 2018.¹
- Resolución SUB 207943 del 6 de agosto de 2018, por medio de la cual COLPENSIONES, le negó el reconocimiento de la pensión de vejez al demandante.²
- Formato elevado el 30 de agosto de 2018, en donde la parte actora presenta a COLPENSIONES, el recurso de reposición y en subsidio el

¹ Folio 9

² Folios 13 a 17

de apelación en contra de la resolución SUB 207943 del 6 de agosto de 2018.³

- Resolución SUB 241036 del 13 de septiembre de 2018, a través de la cual COLPENSIONES, resuelve el recurso de reposición y decide confirmar en todas sus partes la resolución SUB 207943 de 2018.⁴
- Resolución DIR 18320 del 12 de octubre de 2018, por medio de la cual COLPENSIONES, da trámite al recurso de apelación, y resuelve confirmar la resolución SUB 207943 de 2018.⁵
- Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.⁶
- Certificado de información laboral, expedido por el municipio de Amagá, en donde se certificado los tiempos laborados del 11 de enero de 1988 al 3 de abril de 1988 y del 11 de febrero de 1991 al 30 de diciembre de 1994, en el cargo de obrero.⁷
- Historia laboral expedida por COLPENSIONES, actualizada al 9 de noviembre de 2018, y la incorporada en el expediente administrativo con fecha de actualización al 24 de enero de 2022.⁸

De acuerdo con lo anterior, los **problemas jurídicos** a resolver de conformidad con el recurso interpuesto y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, será determinar: **i)** si el actor tiene derecho al reconocimiento o no de la pensión de vejez, bajo el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, dándole aplicación a lo preceptuado en el decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta la sumatoria de tiempos públicos y privados; de ser procedente la misma, se analizará el retroactivo y la prescripción, como también; **ii)** el reconocimiento de la prestación económica de vejez al haberse efectuado el pago de la indemnización sustitutiva; de igual forma se revisará, **iii)** la indexación

³ Folios 18 a 21

⁴ Folios 23 a 27

⁵ Folios 28 a 33

⁶ Folios 34 y 35

⁷ Folios 37 a 39

⁸ Folios 40 a 45

ordenada por el juez; y por último, **iv)** la condena en costas impuestas a COLPENSIONES.

i. Pensión de vejez – sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el decreto 758 de 1990.

Para comenzar es necesario señalar que la ley 100 de 1993 en su artículo 36, consagró el régimen de transición pensional, como una protección a aquellas personas que, a juicio del legislador, estaban próximas a cumplir los requisitos para acceder a su pensión; para este grupo poblacional dispuso que se respetarían las condiciones de edad, semanas cotizadas y monto consagradas en el régimen anterior. Esta prerrogativa consagra en dicho artículo como requisitos, que al momento de entrar en vigencia el sistema cuenten con 40 o más años de edad, en el caso de hombres, o 15 o más años de servicios.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que en principio el actor ostenta la calidad de beneficiario del régimen de transición, atendiendo a que para el 30 de junio de 1995⁹, por tener la calidad de trabajador oficial, cumplió los 40 años de edad como lo dispone el artículo en mención, toda vez que nació el 16 de septiembre de 1941, por lo que le es aplicable el decreto 758 de 1990.

Ahora, el decreto 758 de 1990, consagra que el derecho a la pensión de vejez se causa una vez el afiliado, en este caso hombre, cumpla 60 o más años de edad y cuente con un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o que acredite un número de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que para el estudio de la anterior normatividad, se hace innecesario el análisis del acto legislativo 01 de 2005, es decir, la exigencia de las 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005, pues el actor cumplió la edad mínima para acceder a la pensión de vejez el 16 de septiembre de 2001, fecha en la cual ya reunía las semanas requeridas,

⁹ Artículo 151 ley 100 de 1993. Parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.

como se pasará a ver posteriormente, siendo la norma clara en señalar que el acatamiento de las 750 semanas, se hace exigible solo para las personas que se les deba extender el régimen de transición más allá del 31 de julio de 2010, el cual se les mantendrá el régimen de transición hasta el año 2014.

Pues bien, para hablar de la sumatoria de tiempos públicos y privados, hay que remitirnos en lo dispuesto en la sentencia de unificación SU-769 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se permite sumar tiempos públicos y privados, bajo lo dispuesto en el decreto 758 de 1990, criterio que acoge esta Sala, no siendo de recibo lo alegado por la apoderada de Colpensiones en lo que tiene que ver con la retroactividad de esta providencia y debiendo ser reconocido el derecho solo a partir de la sentencia SL1947 de 2020, toda vez que las sentencias de unificación tienen efectos vinculantes, pues buscan dar precisión a la interpretación de la norma para mayor seguridad jurídica, no debiendo supeditarse a la vigencia de la sentencia de unificación sino al criterio vinculante de la misma.

Del párrafo precedente debe explicar la Sala que, si bien en anteriores oportunidades en lo que respecta a la sumatoria de tiempos públicos y privados se venía aplicando lo establecido en la sentencia T-508 de 2017, en donde la sumatoria de tiempos solo era aplicable para garantizar el acceso a la pensión de vejez, como sucede en el presente caso, y no para reliquidar, es decir, incrementar la tasa de reemplazo, ante toda duda interpretativa la Corte Constitucional en la sentencia T-219 de 2021, señaló:

“Finalmente, en lo que respecta a la aparente distinción entre una situación de reconocimiento y otra de reliquidación, es necesario señalar que, además de que esa diferencia no tiene sustento en la línea jurisprudencial construida, resulta abiertamente violatoria de los principios de igualdad y de favorabilidad. En efecto, bajo esa distinción, la definición de una misma situación pensional conforme al artículo 53 superior se limitaría por un escenario formal en el que no incide la actividad del trabajador.”

Este criterio, fue reiterado en la sentencia SU-273 de 2022, en donde la Alta Corte Constitucional, resaltó la unanimidad que con su criterio guarda la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siendo muestra de esta particular la sentencia SL2557 de 2020, en la que órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria indicó:

“... conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.”

Es claro para la Sala que conforme con el precedente jurisprudencial contenido entre otras en las sentencias T-090 de 2009, T-181 de 2011, T-193 de 2013 y SU-769 de 2014, es posible la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con aportes realizados al ISS hoy Colpensiones para efectos de aplicar el Decreto 758 de 1990, desarrollo acogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL-1947 de 2020, en la que sustentó su nuevo criterio, indicando que la Ley 100 de 1993 prevé diversos instrumentos de financiación de las pensiones, como: bonos, cálculos actuariales o cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna y dado que las pensiones de transición se causan en su vigencia, es procedente su computo sin distinción del origen; por lo tanto, esta Sala en reconocimiento de la fuerza vinculante del precedente acata el mismo, abandonando cualquier interpretación que en contrario sostuviera.

Así pues, con las historias laborales anexadas al plenario, junto con las certificaciones de información laboral expedidas por la entidad pública, se tiene que el demandante cumple cabalmente con el requisito de las 500 semanas exigidas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, del 16 de septiembre de 1981 al mismo día y mes del año 2001, acreditando **541** semanas laboradas, cumpliendo lo exigido por el decreto 758 de 1990.

En lo que respecta al **monto de la pensión** y al **retroactivo pensional** reconocido por el juzgado del conocimiento, estos se ajustan a derecho, pues la pensión se liquidó en base a un salario mínimo legal mensual vigente para cada época, prosperando la excepción de **PRESCRIPCIÓN** como correctamente lo realizó el juez, por las siguientes razones:

El artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 4º de la ley 712 de 2001, referente a la reclamación administrativa, establece que

las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Añadió el artículo que mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.

A su turno, el artículo 151 de la misma codificación establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Debe precisarse en este punto de la providencia la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción. El primero de los términos da lugar con el simple reclamo escrito ante la entidad, lo que genera como consecuencia que la prescripción se interrumpa por un término de tres años; el segundo de los términos refiere a que, mientras se agota la reclamación administrativa, el término prescriptivo se suspende, lo que conlleva a que, una vez se dé dicho agotamiento, el término de prescripción comenzará a contabilizarse.

De lo anterior se establece que el término de prescripción se interrumpió por una única vez con el reclamo que el demandante le hiciera a COLPENSIONES el **4 de julio de 2018**; prescripción que se vio suspendida hasta tanto se agotó la reclamación administrativa, esto es, el 23 de octubre del mismo año, momento para el cual le fue notificada la resolución DIR 18320 de 2018 (por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación). Y es a partir de este momento que se contabiliza el término trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que se contaba hasta el mismo día y mes de 2021, para presentar la demanda sin que se vieran afectadas las mesadas pensionales causadas.

Así pues, no es de recibo lo manifestado por la apoderada de COLPENSIONES, en lo relacionado a que el término de prescripción debe contabilizarse a partir del 13 de septiembre de 2018 (fecha de la resolución que resolvió el recurso de reposición), pues ello desconocería lo señalado en el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y en la sentencia C-792 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, providencia que aclara cuándo se entiende agotada la reclamación administrativa.

Así las cosas, atendiendo a que la demanda fue presentada ante la oficina de apoyo judicial de la ciudad de Medellín el 16 de noviembre de 2018, solo se ven afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción todas aquellas mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de julio de 2015, esto es, 3 años anteriores a la fecha en que se elevó la solicitud, como correctamente lo señaló el juez. Debiéndose en este sentido **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia.

ii. Incompatibilidad del reconocimiento de la prestación económica de vejez con la indemnización sustitutiva de vejez.

Es necesario señalar que, si bien al actor se le reconoció en un primer momento la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por no cumplir con el lleno de los requisitos, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de vieja data, como lo es la de radicación 39504 de 2011, que rememora la sentencia 35896 de 2009, señaló:

“La Sala ha asentado la tesis según la cual la indemnización sustitutiva es una prestación provisional, cuya recepción no impide reclamar judicialmente que se dilucide si lo que procedía era ese reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de vejez; sin embargo se ha de entender que esta postura hace referencia a cuando se analiza la situación del afiliado respecto a la densidad de cotizaciones para el momento en el que se hizo la solicitud de reconocimiento de los derechos a la administradora de pensiones. No comprende entonces, casos como el sub lite en el que se pretende que se declare la existencia del derecho a la pensión de vejez, sumándole un número importante de cotizaciones a las que se compensaron con la indemnización sustitutiva, y cotizadas después de haberse solicitado y recibido esta última prestación.”.

Así pues, en el caso de autos, la pensión de vejez se está analizando con las semanas efectivamente reconocidas en la indemnización sustitutiva, sin existir

semanas posteriormente cotizadas, por lo que esta Sala se suma a la tesis de la Alta Corte, cuando señala, que la indemnización sustitutiva es una prestación provisional, cuya recepción no impide reclamar judicialmente cuando realmente lo que procedía era el reconocimiento a la pensión de vejez.

Debiendo en este sentido proceder la compensación indexada, tal y como lo expresó el juez de la primera instancia. Por tal razón, la sentencia deberá ser **CONFIRMADA** en este sentido.

iii. Indexación de las condenas.

En lo que tiene que ver con la indexación de las mesadas, es indudable que la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano es un hecho notorio, pues cuando un pago no se hace en la fecha de su exigibilidad el mismo comienza a depreciarse y la indexación o revaluación judicial es el mecanismo apropiado para combatir ese defecto. En virtud de lo anterior, se accederá al reconocimiento de la indexación, debiéndose **CONFIRMAR** lo manifestado por el juez de primera instancia, en tal aspecto.

iv. Costas procesales.

Por último, en relación con la condena en costas impuestas a COLPENSIONES, en innumerables providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal, ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena, y en el presente caso, COLPENSIONES fue el único vencido, pues tiene la obligación de reconocer la prestación económica solicitada, debiéndose **CONFIRMAR** en tal sentido la sentencia.

Corolario de todo lo dicho, es que la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta merece ser **CONFIRMADA** en su integridad.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. En estas son a cargo de COLPENSIONES, por no salir avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$1.000.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia de la primera instancia, que se revisa por vía de apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

SEGUNDO: Costas procesales y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esa providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Manuel Salvador Cañas
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-010-2018-00689
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 28 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 28 de noviembre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO